

## CAPÍTULO VI

# Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos

### INTRODUCCIÓN

La Constitución Política, al definir a Colombia como un Estado Social de Derecho dentro de un marco democrático, descentralizado y participativo, establece que la organización y la administración del Estado deben estar al servicio de los ciudadanos. Así (en 2019), el Estado deberá ser eficiente y transparente, con decisiones de inversión basadas en la evaluación de resultados. El insumo fundamental de ésta será la existencia de información pública y en tiempo real. Para lograr este objetivo el Estado deberá haber consolidado un modelo de intervención óptimo en la economía, en sus funciones de planeador, regulador, controlador y promotor; de forma tal que para 2019 la Nación se concentre en la definición de políticas y sólo ejecutará directamente grandes proyectos estratégicos, en tanto que los entes territoriales tendrán a su cargo el resto de la ejecución del gasto público.

Para 2010 se habrán introducido las modificaciones legales necesarias para consolidar la claridad, estabilidad y seguridad jurídica para la participación de los agentes económicos en los mercados. En este sentido, se habrá completado la autonomía de los organismos de regulación a cambio del fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, de control político por parte del Congreso y de mejoras en los mecanismos de interacción entre los agentes regulados y los usuarios. En cuanto a la institucionalidad de control, será necesario adoptar un régimen jurídi-

co propio y común, además de descentralizar los procesos, fortaleciendo la presencia regional indirecta mediante convenios interadministrativos con cámaras de comercio, alcaldías, personerías y universidades.

Las reformas que se introduzcan al Estado deberán aprender de las lecciones del proceso de descentralización que introdujo la Constitución de 1991 y del proceso de construcción del ordenamiento territorial. Las entidades territoriales son ya los principales responsables de la atención de los servicios sociales y deberán asumir funciones adicionales en la ejecución de las políticas públicas. Para 2019, el país deberá haber consolidado una política de descentralización clarificando la distribución de competencias y asignación de recursos, reconociendo la heterogeneidad regional y promoviendo dinámicas territoriales que trasciendan los límites político-administrativos. Antes de 2010, Colombia deberá tener un sistema de financiación territorial sostenible que haya clarificado el sistema actual de compensación, que tiene numerosos problemas tanto en el sistema general de participaciones como en regalías. En cuanto a ordenamiento territorial, hacia 2010 el país deberá haber ajustado el marco constitucional y aprobado la ley orgánica, que permita un ordenamiento flexible, con nuevas formas de organización e integración.

Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos deberá tener en cuenta la creciente interdependencia

entre los países y la aparición de nuevos bloques y nuevos actores sociales y políticos en la esfera internacional. En 2019 Colombia deberá estar integrada al mundo, aprovechando estratégicamente sus potencialidades; deberá tener la capacidad de generar diferenciación política desde lo positivo y de interactuar en un mundo de bloques múltiples y superpuestos. Colombia tendrá que cambiar la imagen de país asociado al narcotráfico y a sus efectos nocivos sobre las instituciones democráticas y la economía, y desarrollar nuevos imaginarios sobre la base de su extraordinaria localización geográfica, su tradición democrática, la riqueza de su biodiversidad, su capital humano y el potencial de su economía, entre otros. No menos importante es que Colombia, como país perteneciente a diferentes grupos regionales, deberá potenciar aquella localización geográfica y convertirse en articulador estratégico en el hemisferio y en punto de unión –bisagra– del continente americano. Igualmente, en este plano, Colombia deberá diversificar el ámbito geográfico fortaleciendo y ampliando sus relaciones con otros países y regiones,

como la Unión Europea y Asia, en donde será crucial el ingreso del país a la Cooperación Económica de Asia y del Pacífico (APEC).

Uno de los grandes desafíos globales del nuevo milenio para los Estados será también construir una sociedad informada. La información es una necesidad humana básica, un derecho y un fundamento de toda organización social; es un bien público que el mercado no provee adecuadamente y que los ciudadanos necesitan. El Estado tiene por tanto la obligación de intervenir para asegurar la libertad de crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimiento. Para 2019, la información deberá ser en la sociedad colombiana un derecho efectivo y un instrumento de difusión y apropiación del conocimiento, una herramienta que promueva el desarrollo económico, la equidad social y la democracia. Colombia deberá alcanzar estándares adecuados de generación de información confiable y oportuna y de uso colectivo. El Estado deberá promover su disseminación, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.